

No. 57218*

**Argentina
and
Ecuador**

**Social Security Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Ecuador.
Quito, 9 December 2015**

Entry into force: *21 May 2019, in accordance with article 28*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 30 May 2022*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Argentine
et
Équateur**

**Accord de sécurité sociale entre la République argentine et la République de l'Équateur.
Quito, 9 décembre 2015**

Entrée en vigueur : *21 mai 2019, conformément à l'article 28*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine,
30 mai 2022*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

La República Argentina y la República del Ecuador animados por el deseo de regular las relaciones recíprocas en el área de la seguridad social, han convenido lo siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Definiciones

1. A los fines del presente Convenio se entiende por:
 - A. "Partes": la República Argentina y la República del Ecuador, en adelante denominadas Argentina y Ecuador.
 - B. "Territorio": respecto a la Argentina, el territorio argentino; respecto al Ecuador, el territorio ecuatoriano.
 - C. "Legislación": las leyes, los decretos y las demás disposiciones relativas a los sistemas de Seguridad Social vigentes en el territorio de cada una de las Partes, señalados en el Artículo 2 del presente Convenio.
 - D. "Autoridad Competente": en la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS); en el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
 - E. "Institución Competente": la institución responsable de la aplicación de la legislación señalada en el artículo 2 del presente Convenio.
 - F. "Organismo de Enlace": organismo de coordinación e información entre las Instituciones Competentes de ambas Partes que interviene en la aplicación del Convenio y en brindar la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del Convenio.
 - G. "Trabajador": toda persona que por realizar o haber realizado una actividad dependiente o por cuenta propia está o ha estado sujeta a las legislaciones enumeradas en el artículo 2 de este Convenio.

- H. "Familiares" y "Derechohabientes": las personas definidas como tales por la legislación aplicable.
 - I. "Período de seguro": todo período de servicios acreditados con aportes, así como cualquier período considerado como equivalente por la legislación vigente bajo la cual se haya cumplido.
 - J. "Prestación": cualquier beneficio dinerario de jubilación, pensión, retiro, renta, subsidio o indemnización u otro previsto por las legislaciones mencionadas en el artículo 2 de este Convenio, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.
 - K. "Beneficiario": la persona definida como tal por la legislación aplicable.
2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les atribuye la legislación aplicable.

Artículo 2
Ámbito de aplicación material

1. El presente Convenio se aplicará:
- A. En el caso de Argentina:
 - a. A las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social en lo que se refiere a los regímenes de vejez, invalidez y muerte, administrados por organismos:
 - i. Nacionales
 - ii. Provinciales de empleados públicos o profesionales
 - iii. Municipales
 - b. Al régimen de Asignaciones Familiares en lo que se refiere exclusivamente a la Asignación por Maternidad.
 - B. En el caso de Ecuador:
 - a. A la legislación sobre el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Universal Obligatorio.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro complemente, modifique o reemplace la legislación que regula las situaciones contempladas en el inciso precedente.
3. Las Autoridades Competentes se notificarán mutuamente sobre las modificaciones relevantes en sus respectivas legislaciones señaladas en el presente artículo, que puedan afectar la aplicación de este Convenio.
4. Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a las prestaciones de carácter no contributivo.

Artículo 3
Ámbito de aplicación personal

El presente Convenio se aplicará a todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, que estén o hayan estado sujetas a la legislación a la que hace referencia el Artículo 2 del presente Convenio, así como a sus familiares y derechohabientes.

Artículo 4
Principio de igualdad de trato

Las personas a las que sea de aplicación el presente Convenio, tendrán derecho a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación de la Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Convenio.

Artículo 5
Conservación de los derechos adquiridos y exportación de prestaciones

1. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, las prestaciones que sean otorgadas por su aplicación, no podrán estar sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención alguna, excepto las que, en su caso, se deriven de los costos de transferencia, por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte o de un tercer Estado y se le harán efectivas conforme a los procedimientos vigentes en cada Parte.
2. Las mismas condiciones se harán extensivas a las prestaciones que sean otorgadas por aplicación de la legislación de una Parte cuando el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte.

TITULO II
DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 6
Norma general

Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetas, exclusivamente, a la legislación de Seguridad Social de la Parte en cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

Artículo 7
Normas particulares y excepciones

1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 6, se establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
 - A. El trabajador que ejerza una actividad dependiente al servicio de una empresa con sede en el territorio de una de las Partes, que desempeñe tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que sea trasladado temporalmente para prestar servicios en el territorio de la otra Parte, continuará sujeto a la legislación del Estado de origen hasta un plazo de doce meses, siempre que no sea enviado en sustitución de otro trabajador al cumplirse el plazo de su traslado temporario; excepcionalmente el plazo podrá prorrogarse hasta doce meses, mediante previo y expreso consentimiento de la Autoridad Competente o de la Institución Competente de la otra Parte.
 - B. Las mismas normas detalladas en el acápite anterior se aplicarán a los trabajadores que habitualmente ejerzan dichas tareas por cuenta propia en el territorio de una de las Partes y que se trasladen para ejercerlas en el territorio de la otra Parte.
 - C. El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo o terrestre que desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes estará sujeto a la legislación de la Parte en cuyo territorio tenga su sede principal la empresa. Sin embargo, si la empresa tuviera una sucursal o una representación permanente en el territorio de la otra Parte, la persona que trabaje para esta sucursal o representación permanente estará sujeta a la legislación de la Parte en cuyo territorio esté domiciliada dicha persona.
 - D. El trabajador que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación de la Parte cuya bandera enarbole el buque. Sin embargo, el trabajador que ejerza una actividad asalariada a bordo de un buque de bandera de una de las Partes y sea remunerado en virtud de esa actividad por una empresa con sede en el territorio de la otra Parte, quedará sujeta a la legislación de esta última Parte si reside en su territorio.
 - E. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación de la Parte a cuyo territorio pertenezca el puerto.
 - F. Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes, acreditados en el territorio de la otra, se regirán por lo establecido en las Convenciones

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.

- G. Los funcionarios públicos y el personal asimilados de una de las Partes que en el ejercicio de sus funciones sean enviados al territorio de la otra Parte, quedarán sujetos a la legislación de la Parte de cuya administración ellos dependan.
 - H. Si un nacional de una Parte es contratado por una Misión Diplomática u Oficina Consular de ésta o por un funcionario de una Misión Diplomática u Oficina Consular de esta Parte en el territorio de la otra Parte quedará sujeto, en principio, a la legislación del Estado donde ejerce la actividad laboral. Sin embargo podrá optar, dentro del plazo de los 6 primeros meses después del comienzo de la actividad laboral o después de la entrada en vigor del presente Convenio, por la aplicación de la legislación de la primera Parte, la que registrará durante la actividad laboral como si el nacional allí estuviera trabajando. La opción deberá ser comunicada al empleador.
 - I. Las personas enviadas por una de las Partes, en misiones oficiales de cooperación al territorio de la otra Parte, quedarán sometidas a la legislación de la Parte que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga lo contrario.
2. Las Partes podrán, de común acuerdo, en interés de ciertas personas o actividades laborales, establecer otras excepciones o modificar las previstas en los apartados anteriores.

TÍTULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES

CAPÍTULO 1
PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE

SECCIÓN 1
Disposiciones comunes

Artículo 8
Determinación del derecho y liquidación de las prestaciones

El trabajador que haya estado sucesiva o alternadamente sometido a la legislación de una y otra Parte tendrá derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:

A. La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro acreditados en esa Parte.

B. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a las prestaciones, totalizando con los propios, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:

1. Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si todos los períodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (haber o prestación teórica).

2. El importe de la prestación se establecerá aplicando al haber o prestación teórica, calculado según su legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro cumplido en la Parte a que pertenece la Institución Competente que calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro cumplidos en ambas Partes (haber o prestación a prorrata).

3. Si la legislación de alguna de la Partes exige una duración determinada de períodos de seguro para el reconocimiento de una prestación completa, la Institución Competente de esa Parte tomará en cuenta, a los fines de la totalización, solamente los períodos de cotización de la otra Parte necesarios para alcanzar derecho a dicha prestación.

C. Determinados los derechos, conforme se establece en los acápite precedentes, la Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte.

D. El derecho a las pensiones de quienes, teniendo en cuenta la totalización de períodos de seguro, no cumplan al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de ambas Partes, se determinará con arreglo a las disposiciones de cada una de ellas.

Artículo 9

Condiciones específicas para el reconocimiento del derecho

1. Si la legislación de una Parte subordina la concesión de las prestaciones reguladas en este Capítulo a la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su legislación en el momento de producirse el hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida, si en dicho momento el trabajador estuviese asegurado en virtud de la

legislación de la otra Parte o, en su defecto, cuando recibiese una prestación de esa Parte, de la misma naturaleza o una prestación de distinta naturaleza pero causada por el propio beneficiario.

2. Las cláusulas de reducción, suspensión o supresión previstas por la legislación de una de las Partes en el caso de beneficiarios que ejercieran una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan su actividad en el territorio de la otra Parte.
3. La Parte en donde el trabajador haya cotizado durante un período inferior a doce meses podrá no reconocer prestación alguna, con independencia de que dicho período sea computado por la otra Parte a los efectos de la totalización.

Artículo 10

Cómputo de período de cotización en Regímenes Diferenciales

1. Si la legislación de una de las Partes condiciona el derecho o la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión o actividad sometida a un régimen diferencial, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte sólo se tendrán en cuenta para la concesión de tales prestaciones o beneficios si hubieran sido acreditados al amparo de un régimen de igual naturaleza o, a falta de éste, en la misma actividad.
2. Si la suma de los períodos de cobertura no permitiese acceder a las prestaciones dentro de los Regímenes Diferenciales, estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión de prestaciones del Régimen General o de otro Régimen Diferencial en que el interesado pudiera acreditar derecho.

Artículo 11

Determinación de la incapacidad

1. La calificación y determinación del grado de invalidez de un solicitante corresponderá a cada Institución Competente, de acuerdo con su propia legislación.
2. Para calificar y determinar el estado y grado de invalidez de los interesados, la Institución Competente de cada Parte tendrá en cuenta los dictámenes médicos emitidos por la Institución Competente de la otra Parte.
3. Los gastos en concepto de exámenes médicos y los que se efectúen a fin de determinar la incapacidad, así como otros gastos inherentes al

examen, estarán a cargo de la Institución Competente que realice los citados exámenes.

4. Los gastos correspondientes a los exámenes médicos que respondan únicamente al interés de una de las Instituciones Competentes serán asumidos íntegramente por ésta.

SECCIÓN 2

Aplicación de la legislación argentina

Artículo 12

Beneficiarios de rentas vitalicias previsionales

A los efectos de la aplicación del artículo 8 del presente Convenio, los períodos cotizados en la Argentina que hubieren dado lugar a una renta vitalicia previsional, podrán ser considerados para obtener una prestación en el otro Estado.

SECCIÓN 3

Aplicación de la legislación ecuatoriana

Artículo 13

1. Los afiliados al Seguro General Obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social financiarán sus prestaciones en Ecuador con las cotizaciones del empleador, empleado y con la contribución del Estado, conforme a la Ley de Seguridad Social, Reglamentos y Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

2. Para la concesión y cálculo de las prestaciones en Ecuador se considerará lo establecido en la Ley de Seguridad Social, Reglamentos, Resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás normativa aplicable.

3. La fijación de prestaciones mínimas y máximas para efectos de este Convenio, se realizará de manera proporcional al tiempo realmente cotizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igual procedimiento se realizará en los casos de incrementos periódicos a las prestaciones.

CAPÍTULO 2
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR MATERNIDAD

Artículo 14

Determinación del derecho a prestaciones económicas por maternidad

Los trabajadores de una y otra Parte se beneficiarán de las prestaciones económicas por maternidad vigentes en Argentina cuando residan en dicha Parte. A tal efecto, se totalizarán, si fuera necesario, los períodos de seguro establecidos para tener derecho a tales prestaciones.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 15

Efecto de la presentación de documentos

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de la aplicación de la legislación de una Parte, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades o Instituciones Competentes de esa Parte, se considerarán como presentados ante ella si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante la Autoridad o Institución Competente de la otra Parte. La fecha en que dichas solicitudes, declaraciones o recursos hayan sido presentados ante una Parte será considerada como la fecha de presentación ante la otra Parte.
2. Ante la presentación de solicitudes, se analizará el derecho a las prestaciones respecto de la legislación de ambas Partes y, en caso de corresponder, se procederá a su liquidación respecto de las dos legislaciones, a menos que el interesado haya solicitado expresamente la prestación con relación a una u otra de las legislaciones aplicables.

Artículo 16

Colaboración administrativa

1. Las Autoridades e Instituciones Competentes de ambas Partes se brindarán asistencia mutua en la implementación del presente Convenio de la misma manera que si aplicaran sus propias leyes. Esta colaboración administrativa será gratuita.
2. Las Autoridades e Instituciones Competentes de las Partes podrán comunicarse directamente entre sí y con las personas interesadas o sus representantes. También podrán, si fuese necesario, comunicarse a través de canales diplomáticos y consulares.

Artículo 17

Beneficios de exenciones en actos y documentos administrativos

1. Las exenciones o reducciones de impuestos, tributos, tasas, timbres y derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de una Parte para la expedición de los documentos exigidos por esa misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos análogos exigidos por la legislación de la otra Parte a efectos del presente Convenio.
2. Todos los actos administrativos emitidos y los documentos y certificados presentados a los fines del presente Convenio estarán exentos de toda legalización.

Artículo 18

Protección de información

Toda información relativa a una persona, que se remita de una Parte a la otra, en virtud del presente Convenio, sólo se utilizará para la aplicación del mismo, quedando amparada dicha información por el principio de protección a la privacidad y confidencialidad de los datos personales, en los términos establecidos por la legislación interna correspondiente.

Artículo 19

Modalidad del pago de las prestaciones

El pago de cualquier prestación de conformidad con el presente Convenio podrá realizarse en la moneda de la Parte cuya Institución Competente efectúe el pago y según la modalidad establecida por la legislación de cada Parte.

Artículo 20

Atribuciones de las Autoridades Competentes

Las Autoridades Competentes de ambas Partes estarán facultadas para:

- A. Establecer los Acuerdos Administrativos necesarios para la aplicación del presente Convenio.
- B. Designar los respectivos Organismos de Enlace.
- C. Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación de este Convenio.
- D. Prestarse sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la aplicación de este Convenio.

Artículo 21
Comisión Mixta

1. Las Autoridades Competentes de ambas Partes podrán reunirse en Comisión Mixta asistidos por representantes de sus respectivas Instituciones, con el objeto de verificar la aplicación del presente Convenio y demás instrumentos adicionales y de proponer las modificaciones que se estimen oportunas en orden a la permanente actualización de dichos documentos.
2. La citada Comisión Mixta se reunirá con la periodicidad que se acuerde, en el Ecuador o en la Argentina.

Artículo 22
Solución de controversias

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas por medio de negociaciones directas entre las Autoridades Competentes o a través de la Comisión Mixta. En el caso de que las Autoridades Competentes o la Comisión Mixta no puedan resolver dichas controversias, las Partes emplearán todos sus esfuerzos para lograrlo a través de negociaciones por la vía diplomática.

TÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 23
Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio

Los períodos de cotización cumplidos según la legislación de una Parte antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.

Artículo 24
Comienzo del período de traslado a la vigencia del Convenio

En la aplicación de los acápites A y B, inciso 1 del Artículo 7 de este Convenio, en el caso de personas que se encuentren en el territorio de la otra Parte antes de la fecha de entrada en vigencia de este Convenio, los períodos de traslado solo darán inicio al momento de la presentación de la solicitud correspondiente ante la Institución Competente.

Artículo 25
Contingencias acaecidas antes de la vigencia del Convenio

La aplicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. No obstante, el pago de las mismas tendrá únicamente los efectos retroactivos previstos en la legislación de la Parte que las reconozca y no se realizará por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.

Artículo 26
Duración y denuncia

1. El presente Convenio tendrá duración indefinida.
2. Las Partes podrán denunciar el presente Convenio. La denuncia tendrá efecto a los 90 (noventa) días posteriores contados a partir de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra, por vía diplomática, su intención de denunciarlo.
3. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos ya adquiridos.

Artículo 27
Modificación del Convenio

El presente Convenio podrá ser modificado, en todo o en parte, de común acuerdo entre las Partes.

Artículo 28
Entrada en vigor

El presente Convenio está sujeto a ratificación y entrará en vigor el día siguiente al de la fecha en que ambas Partes hayan intercambiado los respectivos instrumentos de ratificación.

Hecho en Quito, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil quince (2015), en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos igualmente auténticos.



POR
LA REPÚBLICA ARGENTINA



POR
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

[TRANSLATION – TRADUCTION]

SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Argentine Republic and the Republic of Ecuador, desiring to regulate their reciprocal relations in the field of social security, have agreed as follows:

Part I. General provisions

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

A. “Parties” means the Argentine Republic and the Republic of Ecuador (hereinafter referred to as Argentina and Ecuador).

B. “Territory” with regard to Argentina means Argentine territory and with regard to Ecuador, Ecuadorian territory.

C. “Laws” means the laws, decrees and other provisions relating to the social security schemes in force in the territory of each of the Parties, referred to in article 2 of this Agreement.

D. “Competent authority” means, in Argentina, the Ministry of Labour, Employment and Social Security; in Ecuador, the Ecuadorian Social Security Institute.

E. “Competent institution” means the institution responsible for the application of the laws referred to in article 2 of this Agreement.

F. “Liaison body” means the body responsible for coordination and the exchange of information between the competent institutions of the two Parties involved in the application of the Agreement and in informing the interested parties of the rights and obligations arising from the Agreement.

G. “Worker” means any person who, as a result of working or having worked as an employed person or as a self-employed person, is, or has been, subject to the laws listed in article 2 of this Agreement.

H. “Family member” or “successor” means a person defined as such by the applicable laws.

I. “Period of insurance” means any period of completed service of contributions, as well as any period considered as equivalent by the laws in force under which it was completed.

J. “Benefit” means any monetary benefit of an old-age pension, pension, retirement pension, income, benefit or compensation provided under the laws mentioned in article 2 of this Agreement, including any complement, supplement or appreciation.

K. “Beneficiary” means a person defined as such by the applicable laws.

2. The other terms or expressions used in the Agreement shall have the meaning assigned to them in the applicable laws.

Article 2. Material scope

1. This Agreement shall apply:

A. In the case of Argentina:

- (a) To contributory social security system benefits with regard to the old-age, invalidity and survivors' schemes, administered by:
 - (i) National entities
 - (ii) Provincial public or professional civil servants' entities
 - (iii) Municipal entities
- (b) The family allowances system, in respect of maternity allowances only.

B. In the case of Ecuador:

- (a) To the laws on invalidity, old-age and successors' insurance of the universal obligatory insurance scheme.

2. This Agreement shall also apply to laws that in the future complement, amend or replace the laws regulating the situations referred to in the preceding paragraph.

3. The competent authorities shall notify each other of the relevant changes in their respective laws referred to in this article, which may affect the application of this Agreement.

- 4. The provisions of this Agreement shall not apply to non-contributory benefits.

Article 3. Personal scope

This Agreement shall apply to all persons, whatever their nationality, who are or have been subject to the laws referred to in article 2 of this Agreement, as well as to their family members and successors.

Article 4. Principle of equality of treatment

Unless this Agreement provides otherwise, the persons to whom this Agreement applies shall be entitled to the benefits and shall be subject to the obligations provided for in the laws of the Party in which they are engaged in their activities, under the same conditions as the nationals of that State.

Article 5. Preservation of acquired rights and export of benefits

1. Unless this Agreement provides otherwise, the benefits granted by its application shall not be subject to any reduction, modification, suspension, suppression or withholding, except for those which, if applicable, derive from transfer costs, on the ground that the beneficiary is staying or residing in the territory of the other Party or of a third State and shall be paid in accordance with the procedures in force in each Party.

2. The same conditions shall also apply to benefits granted by application of the laws of a Party when the beneficiary is staying or residing in the territory of the other Party.

Part II. Provisions on the applicable laws

Article 6. General rule

Persons to whom this Agreement is applicable shall be subject exclusively to the social security laws of the Party in whose territory they are engaged in an occupational activity, without prejudice to the provisions of article 7.

Article 7. Specific rules and exceptions

1. The following specific rules and exceptions shall apply with regard to the provisions of article 6:

A. A worker employed by an enterprise with its headquarters in the territory of one of the Parties who is engaged in professional, research, scientific, technical, managerial or similar activities and who is temporarily transferred to provide services in the territory of the other Party, shall remain subject to the laws of the State of origin for a period of up to 12 months, provided that the person has not been sent to replace another worker at the end of the period of the temporary transfer; exceptionally, the period may be extended for up to 12 months, with the prior and express consent of the competent authority or the competent institution of the other Party.

B. The same rules detailed in the previous paragraph shall apply to self-employed workers who are normally engaged in such tasks in the territory of one of the Parties and who transfer to the territory of the other Party in order to engage in them.

C. Itinerant personnel employed by air or land transport enterprises engaged in an activity in the territory of both Parties shall be subject to the laws of the Party in whose territory the company has its headquarters. However, if the enterprise has a branch or a permanent representative office in the territory of the other Party, the person working for such branch or permanent representative office shall be subject to the laws of the Party in whose territory such person is domiciled.

D. A worker engaged in an activity on board a ship shall be subject to the laws of the Party whose flag the ship is flying. However, an employed worker engaged in an activity on board a ship flying the flag of one of the Parties and remunerated for such activity by an enterprise with its headquarters in the territory of the other Party shall be subject to the laws of this latter Party if the worker resides in its territory.

E. Workers employed in ship loading, unloading and repair work and as guards at the port shall be subject to the laws of the Party to whose territory the port belongs.

F. Personnel serving in the diplomatic missions and consular posts of each of the Parties, accredited in the territory of the other Party, shall be subject to the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

G. Public officials and equivalent personnel of one of the Parties who, in the exercise of their functions, are sent to the territory of the other Party, shall be subject to the laws of the Party for whose Administration they work.

H. If a national of a Party is hired by a diplomatic mission or consular post or by an official of a diplomatic mission or consular post of such Party in the territory of the other Party, the national shall be subject, in principle, to the laws of the State in which he or she exercises his or her activity. However, he or she may, within the period of the first six months following the start to the professional activity or after the entry into force of this Agreement, choose the application

of the laws of the first-mentioned Party, which shall apply during the professional activity as if the national were working there. The employer shall be notified of the choice.

I. Persons sent by one of the Parties on official cooperation missions to the territory of the other Party shall remain subject to the laws of the Party which sends them, except if provided otherwise in the cooperation agreements.

2. The Parties may, by mutual agreement, in the interest of certain persons or professional activities, establish other exceptions or modify those provided for in the preceding paragraphs.

Part III. Provisions concerning benefits

CHAPTER I. OLD-AGE, DISABILITY OR SURVIVORS' BENEFITS

Section 1. Common provisions

Article 8. Determination of entitlement to and payment of benefits

Any worker who has been successively or alternatively subject to the laws of one or the other Party shall be entitled to the benefits regulated in this chapter, on the following terms:

A. The competent institution of each Party shall determine the entitlement and calculate the benefit, taking into account only the periods of insurance completed in that Party.

B. Subject to the provisions of the previous paragraph, the competent institution of each Party shall determine the entitlement to benefits by aggregating its own periods of insurance and those completed under the laws of the other Party. When, after aggregation, entitlement to a benefit has been established, the amount to be paid shall be calculated by applying the following rules:

1. The amount of the benefit to which the person concerned would have been entitled shall be determined as if all the aggregated periods of insurance had been completed under the person's own laws (theoretical credit or benefit).

2. The amount of the benefit shall be established by applying to the theoretical credit or benefit, calculated according to the person's own laws, the same proportion that exists between the period of insurance completed in the Party to which the competent institution that calculates the benefit belongs and the aggregated periods of insurance completed in both Parties (pro rata credit or benefit).

3. If the laws of either of the Parties require a specific duration of periods of insurance for recognition of a complete benefit, the competent institution of that Party shall take into account, for the purposes of aggregation, only the periods of contribution of the other Party necessary to qualify for entitlement to that benefit.

C. Having determined the entitlement as laid down in the foregoing paragraphs, the competent institution of each Party shall recognize and pay the financial benefit most advantageous to the person concerned, regardless of the decision taken by the competent institution of the other Party.

D. The entitlement to pensions of persons who, taking into account the aggregation of periods of insurance, do not simultaneously meet the conditions set out in the legal provisions of both Parties, shall be determined in accordance with the provisions of each Party.

Article 9. Specific conditions for the recognition of entitlement

1. If the laws of a Party subordinate the granting of the benefits regulated under this chapter to the condition that the worker must have been subject to its laws at the time when the incident giving rise to the benefit occurred, such condition shall be deemed to have been fulfilled if, at that time, the worker is insured under the laws of the other Party, or else, if he or she receives from that Party a benefit of the same nature or a benefit of a different nature to which the beneficiary himself or herself has been entitled.

2. The clauses concerning reduction, suspension or withdrawal provided for by the laws of either Party in the case of beneficiaries who are engaged in work shall be applicable to them even if they are employed in the territory of the other Party.

3. The Party in which the worker has made contributions for a period of less than 12 months may not recognize any benefit, regardless of whether such period is taken into account by the other Party for the purposes of aggregation.

Article 10. Accounting for periods of contribution in differential schemes

1. If the laws of one of the Parties make entitlement to or the granting of certain benefits conditional on the completion of periods of insurance in a profession or activity subject to a differential scheme, the periods completed under the laws of the other Party shall only be taken into account with a view to the granting of such benefits if they have been completed under a scheme of the same nature, or else, in the same activity.

2. If the sum of the periods of coverage does not grant entitlement to benefits in differential schemes, those periods shall be taken into account for the granting of benefits under the general scheme or under another differential scheme under which the person concerned could become eligible for entitlement.

Article 11. Determination of disability

1. The assessment or determination of the degree of disability of a claimant shall be the responsibility of each competent institution, in accordance with its own laws.

2. In assessing or determining the state and degree of disability of the persons concerned, the competent institution of each Party shall take into account the medical reports issued by the competent institution of the other Party.

3. The cost of medical examinations and examinations conducted to determine disability, as well as other costs inherent to the examination, shall be borne by the competent institution which conducts such examinations.

4. The cost of medical examinations that are in the interest of only one of the competent institutions shall be borne in full by such competent institution.

Section 2. Application of Argentine laws

Article 12. Pension life annuity beneficiaries

For the purposes of the application of article 8 of this Agreement, periods contributed in Argentina that have given rise to a pension life annuity may be taken into consideration to obtain a benefit in the other State.

Section 3. Application of Ecuadorian laws

Article 13

1. Persons enrolled in the obligatory general insurance scheme of the Ecuadorian Social Security Institute shall finance their pensions in Ecuador with employer and employee contributions and the State contribution, in accordance with the Social Security Act and the regulations and decisions issued by the Executive Committee of the Ecuadorian Social Security Institute.

2. For the granting and calculation of benefits in Ecuador, the provisions of the Social Security Act and the regulations and decisions issued by the Executive Committee of the Ecuadorian Social Security Institute and other applicable regulations shall be considered.

3. For the purposes of this Agreement, minimum and maximum benefits shall be established in proportion to the actual period of contribution to the Ecuadorian Social Security Institute. The same procedure shall be followed in cases of periodic increases in benefits.

CHAPTER 2. MATERNITY BENEFITS

Article 14. Determination of entitlement to maternity benefits

Workers of either Party shall receive the maternity benefits in force in Argentina when they live in that Party. For that purpose, if necessary, the periods of insurance established for entitlement to such benefits shall be aggregated.

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 15. Effect of submission of documents

1. The claims, notices, appeals and other documents which, for the purposes of the application of the laws of one Party, must be submitted within a prescribed period to the competent authorities or institutions of that Party, shall be considered to have been submitted to the Party if they have been submitted to the competent authority or institution of the other Party within the same period. The date on which such claims, notices or appeals have been filed with a Party shall be considered to be the date of submission to the other Party.

2. Upon submission of claims, the entitlement to benefits shall be analysed with respect to the laws of both Parties and, if applicable, payment shall be made with respect to the laws of both Parties, unless the person concerned has expressly claimed the benefit with respect to the applicable laws of one Party or the other.

Article 16. Administrative assistance

1. The competent authorities and institutions of both Parties shall assist each other in the implementation of this Agreement in the same manner as if they were applying their own laws. This administrative assistance shall be free of charge.

2. The competent authorities and institutions of the Parties may communicate directly with each other and with the persons concerned or their representatives. They may also, if necessary, communicate through the diplomatic and consular channel.

Article 17. Benefits of exemptions in administrative instruments and documents

1. Exemptions or reductions in respect of taxes, duties, fees, stamp duties and judicial or registration fees, established in the laws of a Party for the issuance of documents required by those laws, shall be extended to the issuance of similar documents required by the laws of the other Party for the purposes of this Agreement.

2. All administrative instruments issued and documents and certificates presented for the purposes of this Agreement shall be exempt from any certification.

Article 18. Protection of information

Any personal information transmitted from one Party to the other, pursuant to this Agreement, shall be used only to apply the Agreement and such information shall be protected in accordance with the principle of protection of privacy and confidentiality of private data, under the terms established by the relevant domestic laws.

Article 19. Methods for the payment of benefits

The payment of any benefit under this Agreement may be made in the currency of the Party whose competent institution makes the payment and following the method established by the laws of each Party.

Article 20. Powers of the competent authorities

The competent authorities of both Parties shall be empowered to:

- A. Draw up the administrative agreements necessary for the application of this Agreement.
- B. Designate their respective liaison bodies.
- C. Notify each other of the measures adopted internally for the application of this Agreement.

D. Extend to each other their good offices and the broadest possible technical and administrative assistance for the application of this Agreement.

Article 21. Joint commission

1. The competent authorities of both Parties may meet as a joint commission assisted by representatives of their respective institutions, for the purpose of verifying the application of this Agreement and other additional instruments and proposing such amendments as they may deem appropriate with a view to keeping those documents permanently up to date.

2. The aforementioned joint commission shall meet at agreed intervals in Ecuador or Argentina.

Article 22. Settlement of disputes

Any disputes arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled through direct negotiations between the competent authorities or through the joint commission. In the event that the competent authorities or the joint commission are unable to settle such disputes, the Parties shall make every effort to do so through negotiations through the diplomatic channel.

Part V. Transitional and final provisions

Article 23. Accounting for periods prior to the entry into force of the Agreement

Periods of coverage completed under the laws of one of the Parties prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into account in determining entitlement to the benefits awarded thereunder.

Article 24. Beginning of the period of transfer upon entry into force of the Agreement

In the application of subparagraphs A and B, paragraph 1 of article 7 of this Agreement, in the case of persons who are in the territory of the other Party prior to the date of entry into force of this Agreement, the periods of transfer shall only commence at the time of submission of the corresponding claim to the competent institution.

Article 25. Contingencies occurring prior to entry into force of the Agreement

The application of this Agreement shall grant entitlement to benefits for contingencies that occurred prior to the date of its entry into force. However, the payment thereof shall have only the retroactive effects provided for in the laws of the Party that awards them and shall not be made for periods prior to the entry into force of the Agreement.

Article 26. Duration and denunciation

1. This Agreement shall be concluded for an indefinite duration.

2. The Parties may denounce this Agreement. Denunciation shall take effect 90 days following the date on which one of the Parties notifies the other, through the diplomatic channel, of its intention to denounce the Agreement.

3. In the event of denunciation, the provisions of this Agreement shall continue to apply to previously acquired rights.

Article 27. Amendment of the Agreement

This Agreement may be amended, in whole or in part, by mutual agreement between the Parties.

Article 28. Entry into force

This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the day following the date on which the two States exchange the respective instruments of ratification.

DONE at Quito, on 9 December 2015, in duplicate, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Argentine Republic:

[SIGNED]

For the Republic of Ecuador:

[SIGNED]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

La République argentine et la République de l'Équateur, désireuses de régler les relations réciproques dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit :

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

A. le terme « Parties » désigne la République argentine et la République de l'Équateur (ci-après dénommées l'Argentine et l'Équateur) ;

B. le terme « territoire » désigne, en ce qui concerne l'Argentine, le territoire argentin, et en ce qui concerne l'Équateur, le territoire équatorien ;

C. le terme « législation » désigne les lois, les décrets et les autres dispositions relatifs aux régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de chacune des Parties, visés à l'article 2 du présent Accord ;

D. le terme « autorités compétentes » désigne, en ce qui concerne l'Argentine, le Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et en ce qui concerne l'Équateur, l'Institut équatorien de sécurité sociale ;

E. le terme « institution compétente » désigne l'institution chargée de l'application de la législation visée à l'article 2 du présent Accord ;

F. le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme responsable de la coordination et de l'échange de renseignements entre les institutions compétentes des deux Parties qui contribue à l'application du présent Accord et qui informe les intéressés sur les droits et les obligations qui en découlent ;

G. le terme « travailleur » désigne toute personne qui, à la suite d'une activité exercée pour son compte ou pour celui d'une autre personne, est ou a été soumise à la législation visée à l'article 2 du présent Accord ;

H. le terme « membre de la famille » ou « successeur » désigne les personnes définies comme telles par la législation applicable ;

I. le terme « période d'assurance » désigne toute période de cotisation accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période de cotisation par la législation en vigueur au titre de laquelle elle a été accomplie ;

J. le terme « prestation » désigne toute prestation monétaire d'une pension de retraite, tout revenu, toute allocation ou toute indemnisation prévus par la législation visée à l'article 2 du présent Accord, y compris tout complément, toute majoration ou toute revalorisation ;

K. le terme « bénéficiaire » désigne les personnes définies comme telles par la législation applicable.

2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification que leur attribue la législation applicable.

Article 2. Champ d'application matériel

1. Le présent Accord s'applique :
 - A. en ce qui concerne l'Argentine :
 - a. aux prestations contributives du système de sécurité sociale relatives aux prestations de retraite, d'invalidité et de survie, administrées par :
 - i. des entités nationales ;
 - ii. des entités provinciales publiques ou professionnelles de la fonction publique ;
 - iii. des entités municipales ;
 - b. au régime d'allocations familiales, pour ce qui est des allocations de maternité exclusivement ;
 - B. en ce qui concerne l'Équateur :
 - a. à la législation sur l'assurance invalidité, sur l'assurance vieillesse et sur l'assurance des successeurs du régime d'assurance obligatoire universel.
2. Le présent Accord s'applique également à la législation qui à l'avenir complétera, modifiera ou remplacera la législation régissant les situations visées au paragraphe précédent.
3. Les autorités compétentes se notifient les modifications pertinentes de leurs législations respectives visées au présent article, susceptibles d'avoir une incidence sur l'application du présent Accord.
4. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux prestations non contributives.

Article 3. Champ d'application personnel

Le présent Accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation visée à l'article 2 du présent Accord, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs successeurs.

Article 4. Principe de l'égalité de traitement

Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont admises au bénéfice et sont soumises aux obligations de la législation de la Partie où l'activité est exercée, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 5. Préservation des droits acquis et exportation des prestations

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les prestations acquises au titre de son application ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ou retenues, à l'exception de celles qui, le cas échéant, découlent des frais de transfert, du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie ou d'un État tiers et sont versées conformément aux procédures en vigueur dans chaque Partie.

2. Les mêmes conditions s'appliquent aux prestations acquises au titre de l'application de la législation d'une Partie lorsque le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie.

PARTIE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 6. Règle générale

Les personnes auxquelles s'applique le présent Accord sont soumises exclusivement à la législation relative à la sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent une activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 7.

Article 7. Règles et exceptions spécifiques

1. Les règles et exceptions spécifiques suivantes s'appliquent aux dispositions de l'article 6 :

A. Un travailleur employé par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties, qui exerce des activités professionnelles, de recherche, scientifiques, techniques, de gestion ou analogues et qui est transféré temporairement pour fournir des services sur le territoire de l'autre Partie, reste soumis à la législation de l'État d'origine durant une période maximale de 12 mois, à condition que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'un autre travailleur parvenu à la fin de la période de transfert temporaire ; à titre exceptionnel, la période peut être prolongée de 12 mois au maximum, avec le consentement préalable et exprès de l'autorité compétente ou de l'institution compétente de l'autre Partie.

B. Les mêmes règles que celles énoncées au paragraphe précédent s'appliquent aux travailleurs indépendants qui effectuent normalement ces tâches sur le territoire de l'une des Parties et qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour les effectuer.

C. Le personnel itinérant employé par des entreprises de transport aérien ou terrestre qui exercent des activités sur le territoire des deux Parties est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège. Toutefois, si l'entreprise possède une succursale ou un bureau de représentation permanent sur le territoire de l'autre Partie, la personne travaillant pour cette succursale ou ce bureau de représentation est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle est domiciliée.

D. Un travailleur exerçant une activité à bord d'un navire est soumis à la législation de la Partie dont le navire bat le pavillon. Toutefois, le travailleur engagé exerçant une activité à bord d'un navire battant pavillon d'une des Parties et rémunéré pour cette activité par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'autre Partie est soumis à la législation de cette dernière si le travailleur réside sur son territoire.

E. Les travailleurs employés pour des travaux de chargement, de déchargement et de réparation de navires et pour des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie où se trouve le port.

F. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de chaque Partie, accrédités sur le territoire de l'autre Partie, sont assujettis aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

G. Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'une Partie qui, dans l'exercice de ses fonctions, sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie sont soumis à la législation de la Partie à laquelle appartient l'administration auprès de laquelle ils sont attachés.

H. Si un ressortissant d'une Partie est engagé par une mission diplomatique ou un bureau consulaire ou par un fonctionnaire d'une mission diplomatique ou d'un bureau consulaire de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie, le ressortissant est soumis, en principe, à la législation de l'État dans lequel il exerce son activité. Toutefois, le ressortissant peut, au cours des six premiers mois suivant le début de l'activité professionnelle ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, choisir l'application de la législation de la première Partie, qui s'applique durant l'activité professionnelle comme si le ressortissant y travaillait. L'employeur est informé de ce choix.

I. 1. Les personnes envoyées par l'une des Parties en mission officielle de coopération, sur le territoire de l'autre Partie, sont soumises à la législation de la Partie qui les envoie, sauf si les accords de coopération en disposent autrement.

2. Les Parties peuvent, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou activités professionnelles, déterminer d'autres exceptions ou modifier celles prévues aux paragraphes précédents.

PARTIE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

CHAPITRE I. PRESTATIONS DE RETRAITE, D'INVALIDITÉ ET DE SURVIE

SECTION 1. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8. Détermination des droits aux prestations et versement des prestations

Le travailleur qui a été, successivement ou alternativement, soumis à la législation de l'une ou de l'autre Partie, a droit aux prestations régies par le présent chapitre, dans les conditions suivantes :

A. L'institution compétente de chaque Partie détermine les droits et établit le montant de la prestation en prenant uniquement en compte les périodes d'assurance accomplies dans cette Partie.

B. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l'institution compétente de chaque Partie détermine le droit aux prestations en additionnant ses propres périodes d'assurance et celles accomplies conformément à la législation de l'autre Partie. Une fois le total calculé et le droit à prestation déterminé, il convient d'appliquer les règles suivantes pour fixer le montant à payer :

1. le montant de la prestation à laquelle la personne concernée aurait eu droit est déterminé comme si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été effectuées conformément à la législation de la personne (avoir ou prestation théorique) ;

2. le montant de la prestation est établi en appliquant à l'avoir ou à la prestation théorique, calculé selon la législation de la personne concernée, la même proportion existant entre la période d'assurance accomplie dans la Partie dont relève l'institution qui calcule la prestation et le total des périodes d'assurance accomplies dans les deux Parties (avoir ou prestation proportionnelle) ;

3. si la législation de l'une des Parties exige une durée spécifique de périodes d'assurance pour donner droit à une prestation complète, l'institution compétente de cette Partie prend en compte, aux fins de totalisation, les seules périodes de cotisation portées au crédit dans l'autre Partie qui sont nécessaires pour donner droit à ladite prestation.

C. Une fois les droits déterminés conformément aux paragraphes ci-dessus, l'institution compétente de chaque Partie valide et accorde à l'intéressé la prestation la plus favorable, indépendamment de la décision prise par l'institution compétente de l'autre Partie.

D. Le droit à prestations des personnes qui, compte tenu des périodes d'assurance totalisées calculables, ne remplissent pas les conditions prévues par les dispositions légales des deux Parties, est déterminé conformément aux dispositions de chaque Partie.

Article 9. Conditions spécifiques à la reconnaissance du droit aux prestations

1. Dans le cas où, en vertu de la législation d'une Partie, les prestations visées au présent chapitre ne sont accordées que si le travailleur était assujéti à ladite législation au moment où s'est produit l'événement ouvrant droit à prestation, cette condition est réputée remplie lorsque, au moment considéré, le travailleur était assuré en vertu de la législation de l'autre Partie ou, à défaut, lorsqu'il reçoit une prestation de cette Partie de même nature, ou bien une prestation de nature différente mais à laquelle l'assuré avait droit.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de retrait prévues par la législation de l'une des Parties dans le cas de prestataires exerçant une activité leur sont applicables même s'ils sont employés sur le territoire de l'autre Partie.

3. La Partie dans laquelle le travailleur a cotisé pendant une période inférieure à 12 mois ne peut reconnaître aucune prestation, que cette période soit ou non prise en compte par l'autre Partie aux fins de la totalisation.

Article 10. Calcul des périodes de contribution au titre de régimes différenciés

1. Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le droit à certaines prestations ou l'octroi de ces prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de travail dans une profession assujéti à un régime différentiel, les périodes accomplies au regard de la législation de l'autre Partie ne sont prises en compte pour l'octroi desdites prestations que si elles ont été accomplies dans le cadre d'un régime de même nature ou dans la même activité.

2. Si la somme des périodes d'assurance ne donne pas droit à prestation en vertu d'un régime différencié, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi de prestations au titre du régime général ou d'un autre régime différencié auquel la personne concernée pourrait prétendre.

Article 11. Détermination de l'invalidité

1. L'évaluation ou la détermination du degré d'invalidité d'un demandeur revient à chaque institution compétente, conformément à sa propre législation.

2. Afin d'évaluer et de déterminer l'état et le degré d'invalidité des personnes concernées, l'institution compétente de chaque Partie tient compte des dossiers médicaux fournis par l'institution de l'autre Partie.

3. Les coûts liés aux examens médicaux et à ceux effectués afin de déterminer l'invalidité, ainsi que les autres coûts découlant des examens, sont à charge de l'institution compétente qui réalise lesdits examens.

4. Les coûts des examens médicaux qui sont dans l'intérêt d'une seule des institutions compétentes sont entièrement à la charge de cette institution compétente.

SECTION 2. APPLICATION DE LA LÉGISLATION ARGENTINE

Article 12. Bénéficiaires de prestations de rente viagère

Aux fins de l'application de l'article 8 du présent Accord, les périodes cotisées en Argentine qui ont donné lieu à une prestation de rente viagère peuvent être prises en considération pour l'obtention d'une prestation dans l'autre État.

SECTION 3. APPLICATION DE LA LÉGISLATION ÉQUATORIENNE

Article 13

1. Les personnes inscrites au régime d'assurance générale obligatoire de l'Institut équatorien de sécurité sociale financent leurs pensions en Équateur au moyen de cotisations patronales et salariales et de contributions de l'État, conformément à la loi sur la sécurité sociale et aux réglementations et décisions du comité exécutif de l'Institut équatorien de sécurité sociale.

2. Aux fins de l'octroi et du calcul des prestations en Équateur, les dispositions de la loi sur la sécurité sociale ainsi que les réglementations et décisions du comité exécutif de l'Institut équatorien de la sécurité sociale et les autres réglementations applicables sont prises en considération.

3. Aux fins du présent Accord, les prestations minimales et maximales sont établies proportionnellement à la durée effective de cotisation à l'Institut équatorien de sécurité sociale. Il en est de même en cas d'augmentation périodique des prestations.

CHAPITRE 2. PRESTATIONS DE MATERNITÉ

Article 14. Détermination des droits aux prestations de maternité

Les travailleurs de chaque Partie bénéficient des prestations de maternité en vigueur en Argentine lorsqu'ils résident dans cette Partie. À cet effet, les périodes d'assurance établies pour avoir droit à ces prestations sont totalisées, le cas échéant.

PARTIE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15. Effet de la présentation des documents

1. Les demandes, les avis, les recours et les autres documents qui, aux fins de l'application de la législation d'une Partie, doivent être soumis dans un délai prescrit aux autorités ou institutions compétentes de cette Partie, sont considérés comme ayant été soumis à la Partie s'ils ont été soumis à l'autorité ou institution compétente de l'autre Partie dans le même délai. La date à laquelle ces demandes, ces avis ou ces recours ont été introduits auprès d'une Partie est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autre Partie.

2. Sur présentation des demandes, le droit aux prestations est analysé au regard de la législation des deux Parties et, le cas échéant, le paiement est effectué conformément à la législation des deux Parties, à moins que la personne concernée n'ait expressément demandé à bénéficier des prestations conformément à la législation applicable de l'une ou l'autre Partie.

Article 16. Assistance administrative

1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de l'application du présent Accord, comme si elles appliquaient leur propre législation. Cette assistance administrative est gratuite.

2. Les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes concernées ou leurs représentants. Elles peuvent également, si nécessaire, communiquer par la voie diplomatique et consulaire.

Article 17. Bénéfice des exemptions pour les instruments et documents administratifs

1. Les exemptions ou les réductions d'impôts, de droits, de taxes, de droits de timbre et de frais judiciaires ou d'enregistrement prévues par la législation d'une Partie pour les documents requis à produire en vertu de cette législation sont étendues à la production de documents analogues requis en vertu de la législation de l'autre Partie aux fins du présent Accord.

2. L'ensemble des actes administratifs produits et des documents et certificats présentés aux fins du présent Accord sont exemptés de toute certification.

Article 18. Protection des renseignements

Tout renseignement personnel transmis d'une Partie à l'autre, en vertu du présent Accord, n'est utilisé qu'aux fins de l'application de l'Accord et est protégé conformément au principe de la protection de la vie privée et du secret de la vie privée, dans les conditions prévues par la législation nationale pertinente.

Article 19. Modalités du versement des prestations

Le versement de toute prestation en vertu du présent Accord peut être effectué dans la devise de la Partie dont l'institution compétente effectue le paiement et selon la méthode établie par la législation de chaque Partie.

Article 20. Attributions des autorités compétentes

Les autorités compétentes des deux Parties possèdent les compétences suivantes :

- A. établir les accords administratifs nécessaires à l'application du présent Accord ;
- B. désigner leurs organismes de liaison respectifs ;
- C. se communiquer les mesures adoptées sur le plan interne aux fins de l'application du présent Accord ;
- D. se prêter mutuellement leurs bons offices ainsi que le concours le plus large possible en matière d'assistance technique et administrative aux fins de l'application du présent Accord.

Article 21. Commission mixte

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent se réunir en une Commission mixte avec le concours de représentants de leurs institutions respectives afin de vérifier l'application du présent Accord et de tout autre instrument additionnel et de proposer des modifications estimées opportunes dans un but d'actualisation permanente de ceux-ci.
2. La Commission mixte susmentionnée se réunit à intervalles convenus en Équateur ou en Argentine.

Article 22. Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des Parties ou par la Commission mixte. Si les autorités compétentes ou la Commission mixte sont incapables de régler ces différends, les Parties s'efforcent d'y parvenir par des négociations par la voie diplomatique.

PARTIE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23. Calcul des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord

Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour déterminer le droit à prestations octroyé au titre du présent Accord.

Article 24. Début de la période de transfert dès l'entrée en vigueur de l'Accord

Pour l'application des alinéas A et B du paragraphe 1 de l'article 7 du présent Accord, dans le cas des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les périodes de transfert ne débutent qu'au moment de la présentation de la demande correspondante à l'institution compétente.

Article 25. Contingences antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord

L'application du présent Accord ouvre le droit à prestations pour des événements survenus avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, leur versement a uniquement les effets

rétroactifs prévus par la législation de la Partie qui les accorde et n'est pas effectué pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 26. Durée et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l'une des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent Accord.
3. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer aux droits précédemment acquis.

Article 27. Modification de l'Accord

Le présent Accord peut être modifié, en tout ou en partie, d'un commun accord entre les Parties.

Article 28. Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à la ratification et entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle les deux États s'échangent leurs instruments de ratification respectifs.

FAIT à Quito le 9 décembre 2015 en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :

[SIGNÉ]

Pour la République de l'Équateur :

[SIGNÉ]